



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veinte (2020)

RADICACIÓN: 11001-33-35-026-2020-00020-00
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: HERNÁN FELIPE MONTOYA DELGADO
DEMANDADO: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO LA POLICÍA NACIONAL-CASUR

En el presente asunto, **HERNÁN FELIPE MONTOYA DELGADO** promueve demanda en contra de la **CAJA DE SUELDOS DE RETIRO LA POLICÍA NACIONAL-CASUR**, con la finalidad de obtener la nulidad de la resolución No. 10660 del 27 de agosto de 2019, proferido por la entidad demandada, por medio del cual le fue reconocido y ordenado pago de asignación mensual de retiro.

Pues bien, analizado el escrito introductorio, y las documentales al plenario, este Despacho observa que no es posible en este momento dar trámite a la demanda presentada, teniendo en cuenta las siguientes,

CONSIDERACIONES

El Capítulo III de la Ley 1437 de 2011, consagra los requisitos que deben reunir las demandas, y para el efecto el artículo 162 dispuso:

“Artículo 162 Contenido de la Demanda. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá:

- 1. La designación de las partes y sus representantes.*
- 2. **Lo que se pretenda, expresando con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones.***
- 3. Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.*
- 4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.*
- 5. La petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. En todo caso, este deberá aportar todas las documentales que se encuentren en su poder.*
- 6. **La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia.***

7. *El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, podrán indicar también su dirección electrónica.*”

Así mismo, el artículo 166 ibídem, señaló que la demanda debe venir acompañada, entre otros, de la copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, comunicación, notificación o ejecución, de los documentos y pruebas anticipadas que se pretenda hacer valer y que se encuentren en poder del demandante, y las copias de la demanda y de sus anexos para la notificación a las partes y al Ministerio Público.

Dicho precepto debe entenderse concordante con el art. 612 del Código General del Proceso, que modificó el artículo 199 de la Ley 1437 de 2011.

Visto esto y al realizar una revisión de tales requisitos, se pudo establecer que la demanda y los anexos, no cumplen con la totalidad de los mismos, como se indica a continuación:

1. De los actos administrativos demandados

La apoderada de la parte demandante solicita:

*“1. Se DECLARE la nulidad del acto administrativo RESOLUCIÓN NÚM. 10660 DEL 27 DE AGOSTO DE 2019 suscrito por el señor Brigadier General ® JORGE ALIRIO BARÓN LEGUIZAMÓN Director de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, y los actos administrativos subsidiarios, que niegan los derechos aquí reclamados.
(...)”*

Analizado el expediente, encuentra el Despacho, que frente a las pretensiones incoadas, y los actos administrativos objeto de demanda, la parte actora no es clara al **1)** momento de establecer, identificar e individualizar los actos administrativos cuya nulidad se pretende, así como tampoco al **2)** establecer lo que se pretende a título de restablecimiento del derecho, como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los actos administrativos objeto de demanda.

No es dable para el Despacho, que se pretenda la nulidad de “los actos administrativos subsidiarios, que niegan los derechos aquí reclamados”, cuando no se establecen cuáles son esos denominados “actos administrativos subsidiarios”, y cuando no se determinan plenamente cuales son “los derechos reclamados y/o negados”.

Razón por la cual, se conminará a la apoderada judicial de la parte actora a que, en primer lugar, determine, en el sentido de individualizar e identificar, los actos administrativos objeto de demanda, y como consecuencia de ello, a la reforma del acápite de pretensiones. Reforma en la que se debe plasmar con precisión y claridad, los actos administrativos cuya nulidad se solicita, y lo que se pretende a título de restablecimiento del derecho.

2. De la estimación razonada de la cuantía

El artículo 162 del C.P.A.C.A. establece lo concerniente a los requisitos que deben reunir las demandas, refiriéndose en su numeral 6º a la estimación razonada de la cuantía, preceptuando lo siguiente:

“Artículo 162 Contenido de la Demanda. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá: (...)

6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia. (...)”

Pues bien, encuentra el Despacho que si bien dentro del escrito de demanda no se estipuló lo concerniente a la estimación razonada de la cuantía, dentro del acápite de pretensiones se logra vislumbrar la estimación de la misma.

Razón por la cual, en primer lugar, se conminará a la apodera judicial, a que conforme a lo estipulado en el precitado art del C.P.A.C.A., establezca en un acápite a parte la cuantía a perseguir dentro del presente asunto.

Ahora bien, la cuantía establecida en el acápite de pretensiones es por un valor de \$47.990.070. Frente a este punto, recuerda el Despacho, que mediante providencia del 20 de abril de 2015, proferida dentro del radicado 11001-03-15-000-2014-02729-01, el Consejo de Estado se pronunció en torno a la aplicación de las reglas de competencia definidas frente al presupuesto procesal de la cuantía, ratificando que es deber del juez verificar dicho elemento al momento de admitir la demanda, señalando que son aplicables de manera preferente las disposiciones jurídicas que frente a esta materia contiene el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En consecuencia, al momento de estimar las aspiraciones económicas, el demandante, deberá tener en cuenta lo preceptuado en el artículo 155 de la Ley 1437 de 2011, en el que se señala los asuntos sobre los cuales tienen competencia los Juzgados Administrativos en primera instancia; refiriéndose en el numeral 2º específicamente a los de carácter laboral, preceptuando lo siguiente:

***“ARTÍCULO 155. COMPETENCIA DE LOS JUECES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA.** Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:(...)*

2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.”

Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que para la fecha de presentación de la demanda, el salario mínimo legal mensual vigente aprobado por el Gobierno Nacional es de **\$877.803.00**, luego entonces, al realizar la operación matemática, tenemos que los **50 S.M.L.M.V.** determinados en la norma precitada, equivalen a

la suma de **\$43.890.150.00**. Valor sobre el cual deberá estimar la cuantía la parte demandante.

Así mismo, la estimación de la cuantía a realizar, deberá estar acorde a lo preceptuado en el 157 del C.P.A.C.A., el que para el efecto establece:

“ARTÍCULO 157. COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. <Ver Notas de Vigencia> Para efectos de competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen. En asuntos de carácter tributario, la cuantía se establecerá por el valor de la suma discutida por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones.

Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor.

En las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho no podrá prescindirse de la estimación razonada de la cuantía, so pretexto de renunciar al restablecimiento.

La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella.

Cuando se reclame el pago de prestaciones periódicas de término indefinido, como pensiones, la cuantía se determinará por el valor de lo que se pretenda por tal concepto desde cuando se causaron y hasta la presentación de la demanda, sin pasar de tres (3) años.”

Del precitado artículo, se concluye que la cuantía deberá calcularse **desde cuando se causaron los derechos y hasta la presentación de la demanda sin que supere los tres años, y sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios**, que causen con posterioridad a la presentación de la demanda.

3. Del derecho de postulación.

Analizado el poder especial conferido a la profesional del derecho, encuentra el Despacho, que este último difiere de las pretensiones incoadas en el escrito de demanda.

Lo anterior, en razón a que el poder especial para actuar fue conferido “con el fin de obtener el reconocimiento y pago de todos los daños y perjuicios MATERIALES E INMATERIALES, consumados y consolidados, consumados pero no consolidados, que me han causado como producto de la expedición del acto administrativo RESOLUCIÓN Núm. 10660 DEL 27/08/19; por medio de la cual me fue reconocido y ordenado el pago de la asignación mensual de retiro omitiendo el pago de las respectivas prestaciones por concepto, subsidio familiar, y prima de orden público y las prestaciones causadas por concepto de subsidio familiar y prima de vuelo no pagadas estando en servicio activo de la Policía Nacional.”; siendo esto totalmente contrario a

los actos administrativos atacados, como a lo pretendido a título de restablecimiento del derecho, dentro del acápite de pretensiones de la demanda.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se conmina al apoderado judicial de la parte actora, a que modifique el poder especial conferido **en aras de que concuerde con las pretensiones a subsanar**, para que así quede claramente identificado el objeto para el cual fue conferido el poder.

Así las cosas, y en virtud de las consideraciones anteriores, la demanda presentada por el apoderado judicial de la actora, no será admitida hasta tanto no sea presentada en debida forma y bajo los lineamientos de la Ley 1437 del 2011, y 1564 del 2012, normas vigentes en materia Contenciosa Administrativa.

En virtud de lo anterior, el Despacho,

R E S U E L V E



PRIMERO.- INADMITIR LA DEMANDA instaurada por **HERNÁN FELIPE MONTOYA DELGADO**, contra la **CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL-CASUR**, por las razones expuestas en este proveído.

SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, se concede a la parte demandante el término perentorio de diez (10) días, con el fin que subsane los defectos señalados en la parte motiva de este proveído, so pena de rechazarse la demanda, al tenor de lo dispuesto en el artículo 170 del C.P.A.C.A.

TERCERO.- Finalmente, es del caso señalar, que también se deberá allegar en medio magnético la subsanación que se realice en los términos indicados a lo largo de este proveído.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,


ANDRÉS JOSÉ QUINTERO GNECCO
Juez


JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.
Por anotación en ESTADO ORDINARIO notifico a las partes la providencia anterior hoy 18 DE FEBRERO DE 2020 , a las ocho de la mañana (8:00 a.m.)
 LIZZETH VIVIANA CANGREJO SILVA SECRETARIA

